



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCIÓN 7“A” DE POLICÍA URBANA PRIMERA CATEGORÍA
Medellín, nueve (9) de enero de dos mil veinticinco (2025)**

Radicado: 02-33113-20
Contravención: Art. 92, Numeral 16 de la Ley 1801 de 2016
Presunto Infractor ESTEFANIA DURANGO TABORDA
Cédula de ciudadanía 1.216.713.443
Orden de comparendo 05-001-6-2020-158408 DEL 07.12.2020

RESOLUCIÓN No.009

Por medio de la cual se declara la caducidad de la acción para imponer medidas correctivas

La **INSPECTORA 7A DE POLICÍA URBANA**, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 206 de Ley 1801 de 2016 y considerando los siguientes:

HECHOS

1. El día 07 de diciembre del año 2020, el S.I. Edwin Velásquez con placa 193305 de la Policía Nacional emitió orden de comparendo **No.05-001-6-2020-158408** a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.216.713.443** por la presunta contravención al artículo 92 numeral 16 de la Ley 1801 de 2016.
2. Se radica el proceso bajo radicado No. 2-33113-20 en la Inspección 7ª de Policía por incurrir en los comportamientos contrarios consagrados en el artículo 92, Numeral 16 de la Ley 1801 de 2016 y en consecuencia, el 11 de diciembre de 2020 el Inspector 7A de Policía Urbana, Wilder Alonso Zapata, emitió la Resolución No.174-2020 “**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN**”.
3. El 08 de febrero de 2024, la Inspectora de Policía Sandra Milena Osorio avoca conocimiento de los hechos del proceso bajo radicado **No. 2-33113-20** y por ende, emprende el análisis del caso en concreto.
4. Mediante Resolución No. 059 del 09 de febrero de 2024 se revocó la Resolución No.174-2020 emitida por el Inspector 7ª de Policía Urbana de Primera Categoría.

CONSIDERACIONES

Para este momento, corresponde a esta inspección, acorde con los supuestos antes planteados, determinar la posibilidad de continuar o no con el trámite de la



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

presente actuación por un presunto comportamiento contrarios consagrados en el artículo 92, Numeral 16 de la Ley 1801 de 2016, para lo cual debemos señalar:

En la medida en que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia- Ley 1801 de 2016 no regula sobre la caducidad de la facultad sancionatoria en casos diferentes a las infracciones urbanísticas, se deberá tener en cuenta lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 que reza a su tenor:

Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

En ese orden de ideas, resulta pertinente acudir de manera analógica al régimen que para casos similares se prevé en las leyes generales de procedimiento tanto administrativo como civil, conforme a los cuales el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 contempla la caducidad de la facultad sancionatoria. en los siguientes términos:

Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.

El Estado ha sido revestido de la potestad sancionatoria con el fin de garantizar la preservación del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de sanciones que reprueben y prevengan las conductas contrarias al mismo.

El artículo 1º Constitucional erige al Estado Social de Derecho como principio medular de nuestra organización política, como una forma de organización estatal encaminada a realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, por lo cual la facultad sancionatoria debe ser ejercida de acuerdo con los principios que conforman el "Debido Proceso".

Según la doctrina y la jurisprudencia, el Debido Proceso se encuentra estructurado por una serie de postulados, entre ellos se resaltaron en el presente concepto los principios de Legalidad en el sentido que tanto la conducta reprochable como la sanción que ella conlleva debe encontrarse debidamente tipificadas, y el principio de temporalidad de la facultad sancionatoria, que señala que el administrado no puede encontrarse sometido indefinidamente a un proceso sancionatorio.

En ese orden, se positivizó en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la "caducidad de la facultad sancionatoria" como el término dentro del cual la administración pública puede adelantar el proceso que conllevará a la imposición de una medida punitiva.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Al respecto, los dominios sancionadores de la administración se han abierto a varias esferas de actuación y se ha ampliado no sólo el tipo de sanciones sino también la competencia en diversas autoridades para imponerlas, y regímenes de caducidad distintos, por lo cual este concepto se delimitó a la regla general de caducidad descrita en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

Tal régimen general se encuentra descrito en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, en el cual se señala que salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas.

La interpretación respecto del acto de la Administración que interrumpe el término de la caducidad, no ha sido pacífica, y las diferentes secciones del Consejo de Estado, han sostenido varias teorías al respecto.

No obstante lo anterior, el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, (nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), acogió la tesis intermedia que señala que, para que se interrumpa el término de caducidad se debe expedir y notificar el acto sancionador. Por otra parte, aunque reconoció que el acto sancionador es diferente de los actos que resuelven los recursos, limitó el término para resolver los mismos a un (1) año contado a partir de su presentación.

En este sentido la línea jurisprudencial emanada por la Corte Constitucional definió la caducidad de la siguiente manera:

(...) La institución jurídica de la caducidad se fundamenta en que a la administración, se le impone unas obligaciones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes y su no ejercicio dentro de los términos señalados por la ley procesal, constituye una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional. La facultad sancionatoria de la administración, eminentemente reglada, está conformada por principios de legalidad y observancia del debido proceso que se sintetiza "...como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ámbito de aplicación inicialmente, destacándose que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata consagrado en el artículo 29 superior, que le reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los artículos 6º y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los elementos básicos de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos (art.6º) y los principios rectos que deben gobernar la actividad administrativa del Estado (art.209). Dentro de ese marco conceptual, la Corte se ha referido al debido proceso administrativo como "(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y legal". Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

funcionamiento de la administración (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados". (Sentencias: C-875 de 2011, C-562 de 1997, C-680 de 1998, C-1512 de 2000, C -131 de 2002, C-204 de 2003 y C-598 de 2011)

Igualmente, el Honorable Consejo de Estado en sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor ÁLVARO LECOMPTE LUNA; y sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera Expediente 4438, MP. Doctor LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, se pronunció frente a la caducidad en las investigaciones administrativas en los siguientes términos:

"(...) Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el termino ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el termino y el momento de su instalación, precisa el termino final e invariable (...)".

Este breve planteamiento jurídico y jurisprudencial nos permite analizar y comprender lo sucedido en el presente procedimiento administrativo, así:

El día 07 de diciembre del año 2020, el S.I. Edwin Velásquez con placa 193305 de la Policía Nacional emitió orden de comparendo **No.05-001-6-2020-158408** a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.216.713.443** por la presunta contravención al artículo 92 numeral 16 de la Ley 1801 de 2016, por tanto, el Inspector de Policía como autoridad competente para resolver sobre la imposición de la multa general tipo 4 a la ciudadana, tenía hasta el 07 de diciembre de 2023.

Sin embargo, advierte ésta Agencia Administrativa que a la fecha en que la suscrita conoce de los hechos, esto es, el 08 de febrero de 2024 como se evidencia en auto que obra dentro del expediente administrativo, ya han transcurrido más de tres años desde la ocurrencia de los mismos, sin que con ocasión de los mismos la autoridad de policía haya efectuado los requerimientos de ley al responsable o presunto infractor.

De manera tal, que las fechas son contundentes y los hechos debatidos también, pues cualquier acción administrativa producto de la presunta violación, no podía generar los efectos sancionatorios producidos, pues ha transcurrido el tiempo inexorable y por ello se produce el fenómeno de la caducidad contemplado en nuestra legislación.

Así las cosas, de lo expuesto y con fundamento en la jurisprudencia y normativa señalada, se puede establecer que tratándose del fenómeno de caducidad, el funcionario competente está en la obligación de hacer su declaración sin que medie petición por parte del interesado.

Ahora bien, si bien pudo incumplirse con la normatividad de la Ley 1801 de 2016 por parte de la presunta infractora, también lo es que ha transcurrido más de tres (3) años hasta hoy desde la ocurrencia de los hechos materia del proceso de

Centro Administrativo Distrital CAD

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144

Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

investigación, por lo tanto, ha de declararse que la facultad sancionatoria que le asistía a esta Dependencia para imponer la sanción caducó, y por ende en la parte resolutive de este acto administrativo ha de precisarse así.

Sin más consideraciones, **LA INSPECTORA 7A DE POLICÍA URBANO DE PRIMERA CATEGORÍA**, en ejercicio de sus funciones y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. Declarar la **CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria en el presente proceso verbal abreviado con radicado **No. 2-33113-20** donde la presunta infractora es la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.216.713.443**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDO. INDICAR a la parte interesada, que contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Señalando a su vez, que el Recurso de Apelación deberá interponerse y sustentarse ante el Secretario de Gestión y Control Territorial, como Autoridad de Policía Especial.

TERCERO. SEÑALAR que esta decisión se notifica de forma personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO. En firme la decisión que antecede, se **ORDENA** insertar las diligencias en el **ARCHIVO** del despacho, previas las desanotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILENA OSÓRIO AGUDELO
Inspectora 7a de Policía

Proyectó: Cinthya Arcila- Apoyo jurídico



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



